

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 4° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-12522-2019
CARATULADO : ALVEAR/BUSES AHUMADA LIMITADA

Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte

VISTO:

Con fecha 11 de abril de 2019, a folio 1, rectificación de 12 de julio de 2019, y texto refundido de 1 de agosto de 2019, comparece el abogado Oscar Fuentes Márquez, en representación de: RICARDO FERNANDO ALVEAR GUZMÁN, empleado; LUCAS JULIANO CORTEZ CARRIZO, independiente; CARLOS MANUEL TERRONES TORRES, estudiante; CARMEN ROSA TORRES PRETTELL, dueña de casa; OSVALDO ANÍBAL CASTRO LESCANO, técnico mecánico; DANIELA DEL CARMEN QUINTANA MUÑOZ, empleada; ROCÍO DELFINA SOSA QUINTANA, estudiante; DIEGO GUILLERMO ROJAS LESPINA, empleado; JONATHAN EMANUEL SANTIBÁÑEZ DUARTE, empleado; ROY DUBERLI CASTILLO HUAMÁN, independiente; KATE ISABEL CASTRO GIMÉNEZ, empleada; MARIANA CECILIA ROJAS LESPINA, esteticista; y CLAUDIO ADRIÁN RODRÍGUEZ GARCÍA, empleado; todos domiciliados en calle Bandera N° 84, oficina 214, comuna de Santiago. El compareciente interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra de BUSES AHUMADA LIMITADA, sociedad comercial, representada por Juan Eduardo Quiroz Ortiz, desconoce profesión u oficio, ambos domiciliados en calle Tucapel Jiménez N° 21, comuna de Santiago.

Refiere que el día 23 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 06:10 horas, sus representados viajaban como pasajeros en el bus placa patente DRZJ-33, conducido por Víctor Raúl Gómez Cabrera y perteneciente a la empresa demandada, habiendo iniciado el móvil su recorrido en la ciudad de Santiago a las 21:30 horas del día anterior, con destino a la ciudad de Mendoza, en Argentina.

Expresa que mientras el bus se desplazaba por la Ruta Nacional N° 7 de la localidad de Uspallata, en Argentina, a la altura del kilometro 1157, y en una pista recta, su conductor perdió el control, chocando con los pretiles de seguridad que se encontraban al borde derecho de la ruta, iniciando un descenso hacia su derecha sin control por una pendiente de unos once metros, donde finalmente y luego de recorrer por la misma unos cien metros, hizo un vuelco quedando recostado sobre su lado derecho.



Sostiene que la causa del siniestro descrito, tal como se habría determinado por la justicia penal argentina, obedeció a que el conductor del vehículo se quedó dormido, debiéndose esto último, a su vez, a las extensas jornadas de trabajo a que se encontraba sometido Víctor Raúl Gómez Cabrera por parte de la empresa demandada.

Asegura que a raíz del accidente descrito sus representados han sufrido importantes perjuicios cuyo resarcimiento demanda y que pasa a pormenorizar.

En el caso de Roy Duberli Castillo Huamán detalla lesiones consistentes en politraumatismos varios, trauma abdomen cerrado con un desgarró de mesocolon izquierdo, y fractura de tibia y peroné izquierdos, debiendo ser intervenido quirúrgicamente y mantener reposo por un periodo superior a un mes, todo lo cual lo mantendría prácticamente postrado, sin poder trabajar y colaborar con la mantención de su familia en Perú. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 10.000.000 por daño emergente (costo de una futura operación), \$ 14.000.000 por lucro cesante (imposibilidad de volver a trabajar hasta fines de 2020, dejando de percibir ingresos por \$ 700.000 mensuales), y \$ 120.000.000 por daño moral (estrés post traumático).

En el caso de Diego Guillermo Rojas Lespina detalla un traumatismo frontal superciliar izquierdo más traumatismo de miembro inferior derecho con heridas cortantes de rodilla y otros politraumatismos, debiendo mantener reposo por al menos dos meses. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 7.000.000 por lucro cesante (imposibilidad de desarrollar su trabajo como estilista), y \$ 80.000.000 por daño moral (estrés post traumático).

En el caso de Mariana Cecilia Rojas Lespina detalla politraumatismos y estrés post traumático, que la habrían hecho dejar su trabajo y residencia en Chile, en razón de lo cual pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Claudio Adrián Rodríguez García detalla politraumatismos, crisis de angustia y estrés post traumático, que lo tendrían hoy con tratamiento de psicoterapia, en razón de lo cual pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte detalla traumatismo de antebrazo y mano derecha, policontusiones, alza de presión por padecer de hipertensión, y un cuadro severo de trastorno por estrés postraumático, manteniendo al día de hoy tratamiento. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Ricardo Fernando Alvear Guzmán detalla politraumatismos, cortes varios en manos y extremidades, y trastorno por estrés postraumático, que



lo habrían hecho dejar su trabajo y residencia en Chile, además de mantener hasta el día de hoy tratamiento psiquiátrico. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Lucas Juliano Cortez Carrizo detalla politraumatismos, escoriaciones varias y trastorno por estrés postraumático, en razón de lo cual pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Kate Isabel Castro Giménez detalla politraumatismos y estrés post traumático, en razón de lo cual pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Carmen Rosa Torres Pretzell detalla policontusiones, escoriaciones varias y estrés post traumático, requiriendo tratamiento por psicólogos y psiquiatra. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Carlos Manuel Terrones Torres detalla politraumatismos y estrés postraumático, en razón de lo cual pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Daniela del Carmen Quintana Muñoz detalla policontusiones (golpes en espalda y pierna) que requirieron tratamiento de fisioterapia, además de estrés post traumático, encontrándose bajo tratamiento psiquiátrico. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 50.000.000 a título de daño moral.

En el caso de Rocío Delfina Sosa Quintana detalla politraumatismos y estrés postraumático, manteniendo al día de hoy tratamiento psicológico, además de pérdida de ingresos, debido a ser despedida de su trabajo como cuidadora de ancianos. En razón de ello, pretende una indemnización de \$ 1.000.000 por lucro cesante y \$ 50.000.000 por daño moral.

Por último, en el caso de Osvaldo Aníbal Castro Lescano detalla policontusiones y estrés postraumático agudo, al haber recibido en sus brazos a una de las víctimas del accidente que finalmente habría fallecido, encontrándose en tratamiento de sicoterapia. En razón de ello, pretende una indemnización de 50.000.000 a título de daño moral.

Entiende que en la especie concurren todos los presupuestos de la responsabilidad contractual respecto de la empresa demandada, citando diversos preceptos legales e invocando jurisprudencia al efecto.

Termina solicitando tener por interpuesta demanda civil de indemnización de perjuicios, declarándose en definitiva: (i) Que a la demandada le cabe responsabilidad contractual en el accidente de tránsito ocurrido el día 23 de diciembre de 2018, al haberse dormido el conductor del vehículo en el cual viajaban los actores; (ii) Que lo anterior denota por parte de la demandada un



incumplimiento grave al contrato de transporte existente entre ella y sus pasajeros; (iii) Que se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones pormenorizadas anteriormente, o aquellas que el tribunal estime pertinentes; (iv) Que las indemnizaciones que procedan deberán ser pagadas más reajustes e intereses desde la época de notificación de la demanda; y (v) Que se condene a la demandada en costas.

A folio 11 consta el atestado receptorial con la notificación de la demanda y su proveído.

Con fecha 13 de agosto de 2019, a folio 16, la demandada Buses Ahumada Limitada evacuó el trámite de contestación, solicitando el rechazo de la demanda incoada en su contra, con costas.

Controvierte el accidente, la legitimación y los daños que se esgrimen como fundamento de la acción, afirmando a continuación que en todo momento ha dado cumplimiento a las normas que regulan la jornada laboral de sus conductores, indicando que la causa basal del siniestro tiene su origen en el propio actuar de Víctor Gómez Cabrera. Recalca que no existe procedimiento sancionatorio alguno en su contra por parte de la Inspección del trabajo, vinculado con el tiempo de trabajo del sujeto aludido. Manifiesta que ha dado fiel cumplimiento a las obligaciones que le asisten en virtud del contrato de transporte. Por último, alega que no son aplicables las disposiciones de la Ley 18.290 a un acontecimiento acaecido fuera del territorio nacional.

Con fecha 29 de agosto de 2019, a folio 18, fue evacuado el trámite de réplica. En ella, junto con ahondarse en las argumentaciones ya vertidas en la demanda, se expresa que el cumplimiento de la jornada de sus conductores la demandada lo sustenta en un sistema manipulado por ella misma, agregando que los testimonios rendidos en el proceso penal incoado en Argentina serían contestes en que el conductor del bus se quedó dormido al instante de suscitarse el accidente. Asimismo, indica que la obligación de la demandada como proveedora de un contrato de transporte consistía en llevar a destino sanos y salvos a los pasajeros, que la Ley 18.290 sería aplicable en la especie porque el vehículo siniestrado inició su recorrido en Chile, y que la demandada sería responsable por el accidente en que estuvo involucrado un vehículo de su propiedad y que explotaba comercialmente, independientemente del régimen legal aplicable.

Con fecha 9 de septiembre de 2019, a folio 20, la demandada evacuó el trámite de réplica, profundizando los argumentos desarrollados en la contestación y destacando que el petitorio del libelo incoado en su contra alude expresamente a



la declaración de su responsabilidad derivada del hecho de haberse quedado dormido el conductor del vehículo al momento de accidentarse este, producto de la vulneración a normas sobre descanso laboral.

Con fecha 24 de septiembre de 2019 se practicó el llamado a conciliación, el que no prosperó.

Con fecha 27 de septiembre de 2019 (folio 26), y rectificación de 10 de enero de 2020 (folio 35), se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales y pertinentes sobre los cuales esta hubo de recaer.

Con fecha 18 de mayo de 2020, a folio 84, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA TACHA

PRIMERO: Que, en la audiencia de fecha 31 de enero de 2020, la demandada dedujo incidente de tacha en contra del testigo Walterio Méndez Muñoz, atribuyéndole la causal de inhabilidad establecida en el número 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, por haber señalado este que emitió un informe que se acompañó en autos, a cambio del cual podría recibir algún tipo de honorario por las resultas del juicio.

SEGUNDO: Que la parte demandante se opuso a la tacha opuesta, aduciendo que las circunstancias reconocidas por el testigo no configuran la causal de inhabilidad invocada.

TERCERO: Que, para el juzgamiento de la incidencia descrita, cabe tener presente que las tachas de inhabilidad consagradas por la ley tienen por objeto excluir *a priori* un testimonio de la valoración del juez en razón de la calificación previa que el legislador ha hecho sobre su parcialidad; cuestión que se justifica bajo la premisa de entender que los sucesos que conforman la causal de inhabilidad impiden dotar a la declaración del testigo de los caracteres de veracidad e imparcialidad que, acto seguido, serán preponderantes para conferirles algún valor de prueba de tasación legal, con arreglo al artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.

En esta línea de razonamiento, la causal del N° 6 del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil supone un interés de tipo económico en el resultado del juicio para presumir la falta de imparcialidad de un testigo, lo cual no se advierte de manera alguna a partir de las circunstancias reconocidas por el deponente objetado a propósito de las preguntas de rigor, quien solo expresó haber evaluado



a uno de los demandantes, sin algún tipo de contraprestación a cambio. A mayor abundamiento, los términos en que aparece fundada la incidencia planteada corresponden más a una suposición que a una afirmación categórica respecto a la inhabilidad acusada, lo que pone de relieve la falta de asidero de la cuestión sobre la que toca ahora pronunciarse, la cual será desestimada.

II. EN CUANTO AL FONDO

CUARTO: Que Ricardo Fernando Alvear Guzmán, Lucas Juliano Cortez Carrizo, Carlos Manuel Terrones Torres, Carmen Rosa Torres Pretzell, Osvaldo Aníbal Castro Lescano, Daniela del Carmen Quintana Muñoz, Rocío Delfina Sosa Quintana, Diego Guillermo Rojas Lespina, Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, Roy Duberli Castillo Huamán, Kate Isabel Castro Giménez, Mariana Cecilia Rojas Lespina, y Claudio Adrián Rodríguez García, interponen demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual en contra de Buses Ahumada Limitada, por los daños materiales y morales que habrían padecido a consecuencia de un accidente de tránsito acaecido el día 23 de diciembre de 2018.

QUINTO: Que la demandada se opone en todas sus partes al libelo incoado en su contra, negando todos los presupuestos fácticos y jurídicos en que este se fundamenta.

SEXTO: Que, para la prueba de sus asertos, la demandante acompañó, legalmente y sin objeción de contrario, mediante las presentaciones de los folios 1, 44, 54, 55, 56, 60, 69, 77, 79 y 80, la siguiente prueba documental:

- 1) Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes, emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, respecto del vehículo placa patente única DRZJ-33.
- 2) Copia de nómina de pasajeros de bus siniestrado.
- 3) Copias de diversas publicaciones aparecidas en portales de prensa nacionales.
- 4) Copia de Acta de Imputación Formal de fecha 26 de diciembre de 2018, emitida por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza, República de Argentina, en expediente N° T-10.741-2018, "Fiscalía con Gómez Cabrera, Víctor Raúl".
- 5) Copias de epicrisis emitidas por diversos centros asistenciales respecto de los demandantes.
- 6) Copia de Resolución de Multa N° 8520/18/ 38 1,2 y 3, de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la Inspección Provincial del Trabajo de Los Andes, en contra de Buses Ahumada Ltda.



7) Informe Médico suscrito por Walterio Eduardo Meyer Muñoz, de fecha 20 de enero de 2020.

8) Informe de atención psicológica de fecha 27 de diciembre de 2018, suscrito por Luis Alberto García Finch, respecto de Osvaldo Aníbal Castro por su psicólogo.

9) Certificado de viajes emitido por el Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones de Chile, de fecha 9 de octubre de 2019, respecto del demandante Jonathan Santibáñez Ruarte.

10) Copia de constancia de accidente vial otorgado por el Ministerio Público de la ciudad de Mendoza, Argentina, de fecha 3 de enero de 2019, respecto del demandante Jonathan Santibáñez Ruarte.

11) Copia de publicación aparecida en portal de prensa de Argentina.

12) Set de 12 fotografías correspondientes a exámenes médicos, certificados médicos y recetas correspondientes a las demandantes Daniela del Carmen Quintana Muñoz y Rocío Delfina Sosa Quintana.

13) Copia de Informe de Fiscalización iniciada por la Inspección Comunal del Trabajo de Los Andes con fecha 24 de diciembre de 2018 en contra de la demandada.

14) Copia de listado de heridos y fallecidos en accidente del día 23 de diciembre de 2018, emitido por el Hospital Chrabalowski, de la ciudad de Mendoza, Argentina.

15) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes al demandante Jonathan Santibáñez Ruarte.

16) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes a la demandante Mariana Rojas Lespina.

17) Copia de antecedentes médicos, informaciones entregadas por el Hospital al Ministerio Público de Mendoza y certificaciones correspondientes al demandante Roy Duberli Castillo Huamán.

18) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes al demandante Claudio Rodríguez García.

19) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de



guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes a la demandante Daniela del Carmen Quintana Muñoz.

20) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes a la demandante Rocío Sosa Quintana.

21) Copia de antecedentes médicos consistentes en epicrisis, hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), historia clínica de guardia, estadístico de hospitalización, hoja de evolución e indicaciones médicas correspondientes al demandante Diego Rojas Lespina.

22) Set de fotografías que se indican como representativas de la condición de Diego Rojas Lespina.

23) Copia de antecedentes médicos consistentes en hoja de registro RAC (recepción, acogida y clasificación de pacientes), estadístico de hospitalización y hoja de evolución correspondientes a la demandante Kate Isabel Castro Giménez.

24) Set de fotografías que se indican como representativas de un bus accidentado y del lugar en que ello ocurrió.

25) Copia de demanda de tutela laboral presentada ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, bajo el RIT T-1962-2019, en contra de Buses Ahumada Limitada, por Cristian Cereceda Castillo.

26) Copia de declaraciones de pasajeros de bus siniestrado, entregadas ante el Ministerio Público de la ciudad de Mendoza, Argentina, en expediente N° T-10.471-2018, "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*".

27) Copias de antecedentes relacionados con la detención y puesta en prisión preventiva de Víctor Gómez Cabrera, decretada en expediente N° T-10.471-2018, "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*".

28) Informe de atención psicológica de fecha 30 de enero de 2020, suscrito por Romy Bravovisch Froimovich, respecto del demandante Jonathan Santibáñez Ruarte.

29) Copia de publicaciones aparecidas en portales de prensa de Argentina.

30) Formato de almacenamiento digital con video de audiencia de juicio abreviado efectuado en la ciudad de Mendoza el día 6 de septiembre de 2019, en causa N° T-10.471-2018, "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*".

31) Copia de acta de declaración notarial suscrita por Marcelo Gustavo Vial.



32) Certificado de antecedentes como conductor de Víctor Gómez Cabrera, remitido por el Servicio de registro civil e Identificación con fecha 13 de febrero de 2020.

33) Registro de multas cursadas a Buses Ahumada Limitada, durante los años 2016 y 2018, en la Región de Valparaíso y Metropolitana, remitido por el Departamento Jurídico de la Dirección del Trabajo.

34) Copia autorizada y apostillada del Expediente N° T-10471-2018, caratulado "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*", tramitado ante el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la ciudad de Mendoza, Argentina, remitida por el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior.

Cabe mencionar que tratándose de la probanza signada con el numeral 30) de este considerando, no se llevó a cabo la audiencia de percepción ordenada por el tribunal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 348 bis del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: Que, además, la parte demandante aportó el día 16 de enero de 2020 las testimoniales que a continuación se reseñan sucintamente:

▪ Walterio Meyer Muñoz

Al punto de prueba N° 3 declaró que en su calidad de médico, a través de la anamnesis y examen físico que practicó a Roy Castillo, pudo constatar que este sufrió lesiones de consideración en un accidente, consistentes en un trauma abdominal cerrado que derivó en una cirugía de urgencia con necesidad de resección de parte del colon y una posterior colostomía en plan de reposición futura de tránsito intestinal normal, además de una fractura expuesta de la pierna izquierda con alto riesgo de contaminación y de lesión de partes blandas. Agrega que la rehabilitación de estas afecciones no ha sido la adecuada, sufriendo la víctima estrés post traumático y encontrándose impedida de realizar en condiciones normales sus actividades laborales.

Al punto de prueba N° 4 precisa que fue el accidente de un bus el que provocó los perjuicios a la salud de Roy Castillo, lo cual le costa por haber tenido a la vista la epicrisis del Hospital de Mendoza. Luego, reconoce como de su autoría el documento signado con el numeral 7) del considerando sexto.

▪ Carmen González Zambrano

Al punto de prueba N° 3 declaró que conoce a uno de los demandantes, de nombre Jonathan, por ser este amigo de su hermano, notando que aquel, con posterioridad al accidente de autobús que sufrió, mantiene un estado de ánimo distraído y desganado, sin haber vuelto a viajar a Mendoza a ver a su familia por el miedo que ello le genera.



Al punto de prueba N° 4 advierte que los ingresos del demandante aludido se han visto desmejorados producto del accidente, debiendo acudir a préstamos solventados por amistades para atender al pago de sus necesidades.

▪ Ana Paredes Benbow

A los puntos de prueba 3 y 4 alude a que conoce a una de las demandantes de nombre Daniela, quien le habría referido las circunstancias de un accidente que sufrió viajando con su hija y en el cual habrían fallecido otras personas, todo lo cual la mantendría con tratamiento psicológico y remedios.

▪ Luisami Vivas Hernández

A los puntos de prueba 3 y 4 declaró que conoce al demandante Diego Rojas, por ser compañeros de trabajo, advirtiéndole como este ha perdido ingresos remunerados, principalmente de enero a marzo de 2019, debido a las lesiones físicas (en las rodillas principalmente) que padeció con motivo de un accidente, y que le impiden desempeñarse con normalidad en su trabajo de peluquero.

OCTAVO: Que, para la prueba de sus asertos, la demandada acompañó, mediante la presentación de folio 58, legalmente y sin objeción de contrario, la siguiente prueba documental:

- 1) Copia de contrato de trabajo de fecha 13 de mayo de 2016 suscrito con Víctor Gómez Cabrera y anexo de obligaciones específicas de este como conductor.
- 2) Anexo de contrato de trabajo de fecha 1 de octubre de 2016, que establece la jornada excepcional de trabajo en la modalidad de 10 días trabajados por 4 de descanso.
- 3) Set de documentos consistentes en: registro de inducción de hombre nuevo, declaración de estado de salud, entrega de reglamento interno de orden higiene y seguridad, ficha de descripción de cargo, y copia de la licencia profesional de conducir de Víctor Gómez Cabrera.
- 4) Comprobante de feriado del conductor Víctor Gómez Cabrera.
- 5) Informe de asistencia del mes de diciembre de 2018 correspondiente al conductor Víctor Gómez Cabrera.
- 6) Copia de resolución de multa N° 8520/18/38, de fecha 27 de diciembre del año 2018, dictada por la Inspección del Trabajo de Los Andes.
- 7) Copia de reclamación de resolución de multa N° 8520/18/38, correspondiente a la causa RIT I-1-2019, junto a sus resoluciones del Primer Juzgado de Letras de Los Andes.
- 8) Sentencia dictada con fecha 14 de enero de 2020, en la causa referida precedentemente.



9) Sentencia dictada con fecha 13 de septiembre del año 2019, en causa RIT O-20-2019, por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Los Andes.

10) Registro de comprobación de habilidades en la conducción del chofer postulante Víctor Gómez Cabrera.

11) Registro de comprobación de competencias de trabajador recién ingresado, correspondiente a Víctor Gómez Cabrera.

NOVENO: Que los actores enmarcan su acción legal dentro de la responsabilidad contractual, aduciendo que entre las partes existió un contrato de transporte que fue incumplido por la demandada, solicitando en razón de ello el pago de diversas indemnizaciones resarcitorias de perjuicios.

DÉCIMO: Que el contrato de transporte se encuentra definido en el artículo 2013 del Código Civil como aquel en que *“una parte se compromete, mediante cierto precio o flete, a transportar o hacer transportar una persona o cosa de un paraje a otro”*; y también en el artículo 166 del Código de Comercio como aquel *“en virtud del cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercaderías ajenas”*.

UNDÉCIMO: Que las normas citadas anteriormente, así como las demás que regulan los derechos y obligaciones que emanan del contrato de transporte, no determinan la manera precisa que se perfecciona este contrato, razón por la cual cobran relevancia las normas generales sobre formación del consentimiento de los artículos 97 a 108 del Código de Comercio.

De acuerdo a dicho preceptos, el iter de la formación de todo contrato, reconoce al menos las etapas de la oferta y de la aceptación, perfeccionándose la convención, en virtud de lo dispuesto por el artículo 101, en el momento en que el destinatario acepta la oferta, aun cuando dicha aceptación sea ignorada por el oferente.

DUODÉCIMO: Que, en el caso de marras, la demandada corresponde a una empresa de transporte interurbano de pasajeros, que mediante la circulación de sus buses por las vías públicas y el arribo de estos a los terminales determinados por la autoridad competente, y a cambio de un precio o tarifa, propone a un número indeterminado de personas la celebración de contratos de transporte. Por su parte, los demandantes corresponden a individuos de aquel número indeterminado de personas a las cuales una empresa como la demandada dirige su oferta de celebración de contratos de transporte.

DÉCIMO TERCERO: Que, conforme se ha relacionado, la sola circunstancia de que un sujeto aborde uno de los vehículos que la demandada



emplea para el servicio de transporte que ofrece, iniciando el trayecto hacia el lugar de destino preestablecido, revela la aquiescencia entre las partes en cuanto al contrato sobre el cual se viene discurriendo.

DÉCIMO CUARTO: Que se ha agregado al presente juicio la probanza signada con el numeral 34) del considerando sexto, consistente en la copia del Expediente N° T-10471-2018, caratulado "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*", tramitado ante el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la ciudad de Mendoza, Argentina, cuya remisión ha sido efectuada a este tribunal por el Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, luego de que se hiciera llegar al Consulado General de Chile en Mendoza por la Secretaria Judicial de Corte para Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Justicia de esa misma ciudad, reuniendo, por ende, las aptitudes exigidas por el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil para ser considerado como instrumento público.

Entre las diversas piezas que componen el instrumento aludido, se encuentra la sentencia N° 3935, dictada el día 6 de septiembre de 2019 por el Juzgado Penal Colegiado N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza, mediante la cual se condena a Víctor Raúl Gómez Cabrera como autor de los delitos de homicidio culposo agravado, lesiones graves agravadas y lesiones culposas leves, previstos y sancionados por el Código Penal de Argentina, a raíz del accidente de tránsito acaecido el día 23 de diciembre de 2018, aproximadamente a las 06:10 horas, cuando el imputado, quien conducía el vehículo marca Mercedes Benz, placa patente DRZJ-33, perteneciente a la empresa de transporte de pasajeros Ahumada, por la ruta N° 7 de la localidad de Uspallata, departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, Argentina, proveniente de la República de Chile, en dirección oeste-este, a la altura del kilómetro 1158, perdió el control del móvil, colisionando los pretiles de seguridad que se encontraban al borde de la ruta e iniciando un descenso hacia su derecha sin control por una pendiente de unos once metros aproximadamente, donde luego de recorrer por la misma unos noventa y cinco metros hizo un vuelco, quedando recostado el transporte sobre su lado derecho.

La misma sentencia agrega que producto de los sucesos descritos resultaron tres personas fallecidas, otras tres con lesiones graves (entre las cuales se encuentra el demandante de autos Roy Castillo Huamán), y otras veintiséis con lesiones con tiempo de curación e inutilidad para el trabajo inferior a un mes (entre las cuales figuran los también demandantes en autos Kate Isabel Castro Giménez, Ricardo Alvear Guzmán, Osvaldo Aníbal Castro Lescano, Lucas Cortez Carrizo, Daniela Del Carmen Quintana, Diego Rojas Lespina, Mariana Cecilia Rojas Lespina,



Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, Rocío Sosa Quintana, Carlos Manuel Terrones Torres y Carmen Rosa Torres Petrell).

Cabe mencionar que la sentencia referida detenta el carácter de firme, según da cuenta la actuación procesal de fecha 17 de octubre de 2019, que obra también en el expediente que se ha tenido a la vista.

De igual manera, entre las numerosas diligencias de investigación que componen el expediente penal que se viene reseñando, resulta de especial interés el acta de procedimiento realizada a las 18:15 horas del día 23 de diciembre de 2018, en la sede de la 23ª Comisaría de Uspallata, Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza, por consignarse en ésta la planilla de pasajeros que viajaban al interior del vehículo siniestrado, figurando entre ellos los demandantes de autos que se individualizaron como lesionados en la sentencia condenatoria N° 3935, de 6 de septiembre de 2019, con la sola excepción de Kate Isabel Castro Giménez, cuyo registro no aparece en el acta que ahora se examina. Asimismo, y pese a no encontrarse entre los afectados que se singularizan en la sentencia aludida, aparece en la nómina de pasajeros en cuestión el también demandante en autos Claudio Adrián Rodríguez García.

Por otra parte, huelga hacer presente que con el mérito del instrumento signado con el numeral 1) del considerando sexto, consistente en un Certificado de Inscripción y Anotaciones en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, emitido el día 13 de enero de 2019, se corrobora que a esa fecha y desde el 12 de abril de 2017, la propiedad del vehículo conducido por Víctor Raúl Gómez Cabrera el día 23 de diciembre de 2018, correspondiente al bus marca Mercedes Benz, modelo O500 RSD, año 2012, placa patente DRZJ-33, figuraba a nombre de la demandada en autos Buses Ahumada Ltda.

DÉCIMO QUINTO: Que, conforme a las circunstancias apuntadas precedentemente, resulta acreditada la existencia del vínculo contractual invocado en el libelo pretensor, respecto de los actores Roy Castillo Huamán, Ricardo Alvear Guzmán, Osvaldo Castro Lescano, Lucas Cortez Carrizo, Daniela Del Carmen Quintana Muñoz, Diego Rojas Lespina, Mariana Rojas Lespina, Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, Rocío Sosa Quintana, Carlos Manuel Terrones Torres, Carmen Rosa Torres Petrell y Claudio Adrián Rodríguez García, con la empresa demandada Buses Ahumada Limitada, así como el incumplimiento de esta última, a través del obrar negligente e ilícito de un dependiente suyo, a la obligación de transportar sanos y salvos a aquellos al lugar de destino predeterminado.

DÉCIMO SEXTO: Que en lo que respecta a los perjuicios alegados, el primer rubro por el cual se pretende su indemnización corresponde al de daño



emergente, que es un detrimento de tipo material, consistente en la salida efectiva y definitiva de un bien económico del patrimonio de una persona.

En la especie, el actor Roy Duberli Castillo Huamán sustenta este perjuicio en el costo de una futura intervención quirúrgica que deberá asumir para tratar las secuelas físicas producidas por el accidente objeto del presente juicio, sin que existan probanzas aparejadas al proceso que permitan acreditar o hacer presumible el valor de dicha operación.

En efecto, los únicos elementos aportados por la parte interesada que son posibles de conectar con el tópico que se intenta dilucidar, se tratan del informe y declaración testimonial de un tercero ajeno al juicio, quien, señalando detentar la calidad de médico, expuso acerca de las lesiones padecidas por Roy Duberli Castillo Huamán con motivo del accidente de marras, y sobre la evolución y necesidad de tratamiento de estas, sin aludir en modo alguno al eventual costo monetario que ello representaría para el afectado.

Conforme a lo razonado, deberá desestimarse la pretensión indemnizatoria referida al daño emergente.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el segundo rubro de perjuicios por el cual se persigue el resarcimiento corresponde al de lucro cesante, que es un detrimento de tipo material, consistente en el ingreso que deja de percibir un sujeto a causa de que otro incumpla total o parcialmente una determinada obligación.

Este tipo de daño, al estar basado en una hipótesis incierta de ganancia, exige, a quien pretenda acreditarlo, el aporte de antecedentes verosímiles que permitan determinar un beneficio probable, luego de deducidos los costos necesarios para generarlo, para así establecer un rango de certeza en su eventual otorgamiento.

Tal exigencia no ha sido satisfecha en la especie por los demandantes Roy Duberli Castillo Huamán, Diego Guillermo Rojas Lespina y Rocío Delfina Sosa Quintana, quienes reclamando como lucro cesante los ingresos que habrían dejado de percibir a raíz de la imposibilidad de desarrollar sus actividades remuneradas producto del accidente de tránsito del cual fueron víctimas, no han rendido probanza documental alguna que sea conectable con la materia que se intenta esclarecer, sin que la declaración brindada por el testigo Luisami Vivas Hernández, a propósito del segundo de los actores aquí mencionados, satisfaga el estándar de certeza suficiente para establecer una base de cálculo que permita dilucidar una magnitud verosímil del lucro cesante reclamado.

Por la insuficiencia probatoria apuntada, la pretensión indemnizatoria a título de lucro cesante deberá ser desestimada.



DÉCIMO OCTAVO: Que el tercer rubro de perjuicios por el cual se persigue el resarcimiento corresponde al de daño moral, que es un detrimento que que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico que se le infringe antijurídicamente.

En la especie, la probanza signada con el numeral 34) del considerando sexto, consistente en la copia del Expediente N° T-10471-2018, caratulado "*Fiscal con Gómez Cabrera, Víctor*", tramitado ante el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la ciudad de Mendoza, Argentina, cuyo valor probatorio como instrumento público ya se ha establecido en el considerando décimo cuarto, permite establecer los perjuicios que para la salud de los demandantes significó el accidente de tránsito del cual fueron víctimas el día 23 de diciembre de 2018, al contener las fichas clínicas emitidas por los recintos asistenciales en que estos recibieron atención médica luego de ocurrido dicho siniestro.

Tratándose de Roy Duberli Castillo Huamán se da cuenta que este sufrió lesiones de carácter grave, consistentes en traumatismo torácico abdominal, desgarró de mesocolon izquierdo y fractura de tibia y peroné izquierdas, debiendo recibir como tratamientos una laparotomía exploradora, una resección y ostomía en caño de escopeta, una apendicetomía de necesidad por desgarró de mesocolon izquierdo con compromiso vascular y hemoperitoneo, y toilette quirúrgico.

En el caso Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte se ilustra que este padeció una equimosis de 6x8 centímetros en la cara anterior del antebrazo derecho, una excoriación de 3x1 centímetros en el dorso de la muñeca derecha, una excoriación por arrastre de 6x6 centímetros en el dorso del antebrazo derecho, una excoriación de 3x1 centímetros en el borde cubital del antebrazo derecho, excoriaciones en la cara externa del dedo índice de la mano izquierda de 2x1,5 centímetros, y edema y equimosis de 6x3 centímetros en el borde cubital de la mano derecha.

Respecto a Diego Rojas Lespina se revela que este sufrió una herida suturada de 4 centímetros en la región parieto occipital derecha y una equimosis violácea de 5x4 centímetros en la cara anterior del antebrazo izquierdo.

En cuanto a Mariana Rojas Lespina se informa que esta padeció un hematoma de 10 centímetros en la cara posterior de su muslo izquierdo, un hematoma en la cara interna de su muslo derecho, y numerosas equimosis violáceas en el antebrazo derecho.

Tratándose de Rocío Sosa Quintana se refiere que esta sufrió una equimosis violácea de 7x4 centímetros en la cara externa del brazo derecho.



En el caso de Carlos Manuel Terrones Torres se da cuenta que este padeció una excoriación de 0,5 centímetros en la cara anterior de la falange del dedo medio de la mano derecha.

Respecto a Carmen Rosa Torres Petrell se revela que esta sufrió un hematoma en la raíz del muslo derecho, dos equimosis verde violáceas en pie y rodilla izquierdos, y excoriaciones en el pie izquierdo.

En cuanto a Ricardo Alvear Guzmán, Lucas Cortez Carrizo, Daniela Del Carmen Quintana Muñoz y Claudio Adrián Rodríguez García, se informa que estos padecieron politraumatismos leves, mismo diagnóstico que se atribuye a Osvaldo Castro Lescano, sumándose en su caso el de hipertensión arterial.

Cabe recalcar que todas lesiones descritas, a excepción de aquellas que sufrió Roy Duberli Castillo Huamán, son categorizadas por los centros asistenciales como politraumatismos leves, con tiempo de curación e inutilidad para el trabajo inferior a un mes.

Intentando profundizar sobre el aspecto que se viene dilucidando, el testimonio de Walterio Meyer Muñoz alude a las complicaciones que ha experimentado Roy Duberli Castillo Huamán en la evolución y tratamiento de las lesiones antes mencionadas, cuestión que en la actualidad lo tendría con un cuadro de estrés post traumático y con dificultades para reinserirse laboralmente. A su vez, el testimonio de Carmen González Zambrano refiere el decaimiento anímico con que aprecia a Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, traducido en el miedo que ahora tiene de volver a visitar a su familia en Mendoza. Por su parte, el testimonio de Ana Paredes Benbow representa de un modo genérico el pesar emocional experimentado por Daniela Del Carmen Quintana Muñoz. Por último, el testimonio de Luisami Vivas Hernández solo menciona trastornos de tipo económico por los que atraviesa Diego Rojas Lespina.

Por último, valga mencionar que las probanzas signadas con los numerales 8) y 31) del considerando sexto, consistiendo en instrumentos que emanan de terceros ajenos al juicio, que no han concurrido a este a reconocerlos, no revisten valor probatorio alguno conforme a las reglas de la prueba legal tasada que imperan en el ámbito civil y que se traducen, para esta situación específica, en lo previsto por el artículo 346 N° 1 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO NOVENO: Que, según se obtiene del valor reconocido a la prueba ya analizada en los párrafos precedentes, concretamente a aquella de índole documental remitida por Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la ciudad de Mendoza, el daño reclamado por los actores aparece de modo incuestionable en la persona de estos, al sufrir lesiones físicas de diversa entidad, con motivo de un



grave accidente de tránsito que contó incluso con víctimas fatales, en vísperas de una festividad como la navidad que es ampliamente conmemorada por la sociedad.

VIGÉSIMO: Que el dolor e inconvenientes físicos sufridos por los demandantes con ocasión del accidente de tránsito del que fueron víctimas, junto al natural impacto emocional que este les produjo, son todos consecuenciales al incumplimiento contractual de la demandada, a través del actuar de un dependiente suyo, a la obligación de transportar a salvo a sus pasajeros hacia el lugar de destino previamente convenido, lo cual se traduce en una clara conculcación del derecho a la integridad física y síquica garantizado por el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, de modo que ello deviene en un atentado contrario al ordenamiento jurídico y, por tanto, causante de una lesión ilegítima del derecho constitucional aludido, todo lo que, en definitiva, le hace susceptible de una compensación pecuniaria.

Así, entonces, hallándose acreditada la vulneración ilícita de bienes jurídicos de naturaleza moral o extrapatrimonial de que son titulares las víctimas del incumplimiento contractual de la demandada, procede esta compensación, la que se avalúa prudencialmente en la indemnización de \$ 8.000.000 en favor del actor Roy Duberli Castillo Huamán, y de \$ 2.000.000 en favor de los demandantes Ricardo Alvear Guzmán, Osvaldo Castro Lescano, Lucas Cortez Carrizo, Daniela Del Carmen Quintana Muñoz, Diego Rojas Lespina, Mariana Rojas Lespina, Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, Rocío Sosa Quintana, Carlos Manuel Terrones Torres, Carmen Rosa Torres Petrell y Claudio Adrián Rodríguez García.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que los perjuicios antes establecidos habrían sido prevenidos si los actores hubieran recibido el servicio de transporte contratado en las condiciones de seguridad que siempre ha de suponer, de modo que la sola supresión hipotética de la falta comprobada a este deber permite establecer que el menoscabo a la salud y las aflicciones extrapatrimoniales derivadas de él y proferidas a los demandantes, no habrían acontecido, por lo que existe una relación causal entre el accionar reprochable a la demandada y el evento lesivo, que le impone a ésta el deber de indemnizar los perjuicios asentados, por gozar del carácter de directos –en los términos del artículo 1558 del Código Civil-, resultando además ciertos y no meramente hipotéticos o eventuales.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que en cuanto a los reajustes pretendidos por los demandantes, cabe señalar que dichos accesorios no revisten utilidad o importancia alguna para la actualización del valor adquisitivo de la moneda, toda



vez que éste va considerado en el monto que se ha fijado en el presente fallo para avaluar la indemnización prudencialmente determinada a título de daño moral.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, por último, en cuanto los intereses pretendidos por los actores, es preciso señalar que aun cuando la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir un daño extrapatrimonial, tal pronunciamiento se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple a pagar una cierta suma de dinero con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra. Así, entonces, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por los deudores a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva su aptitud para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto, es, a contar de ese momento, que debe considerarse la mora del deudor para los efectos de devengar el capital adeudado los intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce a que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanezca invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose los principios de valorismo en las obligaciones dinerarias y de reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarían sin resarcir.

De acuerdo a lo razonado, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

POR ESTAS CONSIDERACIONES, normas constitucionales y legales citadas, y visto además lo dispuesto en los artículos 1437, 1438, 1545, 1546, 1547, 1553, y 1698 y siguientes del Código Civil; 144, 160, 170, 254, 318, 342, 384 y 426 del Código de Procedimiento Civil; más demás preceptos normativos que resulten aplicables; **SE DECLARA:**

I.- Que se rechaza el incidente de tacha promovido por la demandada con fecha 30 de enero de 2020, en contra del testigo presentado por la parte demandante.



II.- Que se acoge parcialmente la demanda deducida con fecha 11 de abril de 2019, rectificación de 12 de julio de 2019, y texto refundido de 1 de agosto de 2019, solo en cuanto se condena a la demandada Buses Ahumada Limitada, a pagar, por concepto de indemnización de daño moral, la suma de \$ 8.000.000 en favor del actor Roy Duberli Castillo Huamán, y de \$ 2.000.000 en favor de cada uno de los actores que a continuación se individualizan: Ricardo Fernando Alvear Guzmán, Osvaldo Aníbal Castro Lescano, Lucas Julianio Cortez Carrizo, Daniela Del Carmen Quintana Muñoz, Diego Guillermo Rojas Lespina, Mariana Cecilia Rojas Lespina, Jonathan Emanuel Santibáñez Ruarte, Rocío Delfina Sosa Quintana, Carlos Manuel Terrones Torres, Carmen Rosa Torres Petrell y Claudio Adrián Rodríguez García.

III.- Que las sumas decretadas en el románico anterior devengarán intereses corrientes para operaciones no reajustables en moneda nacional, contados desde la época en que esta sentencia sea notificada a la demandada y hasta aquella en que se produzca su pago efectivo.

IV.- Que no resultando completamente vencida la demandada cada parte asumirá sus costas.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

DICTADA POR GUSTAVO CERÓN SEGUEL, JUEZ SUBROGANTE

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de septiembre de dos mil veinte.**

